

## EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 3 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos, por María Blanco, en representación de su hijo José M.<sup>o</sup> Rosales, contra el ayudante del batallón "Libres de Morelos" D. Vicente Garduño, por violación de la garantía á que se refiere el art. 5.<sup>o</sup> de la Constitución federal, cuyo juicio fué proseguido por Rosales, por haber resultado que la Blanco no es madre de él, y considerando: que en el expediente aparece vulnerada en la persona de Rosales la garantía indicada, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el doce del mes próximo pasado por el juez de Distrito de Morelos, que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á José María Rosales contra el acto del ayudante del batallón "Libres de Morelos" que desde 26 de Enero próximo pasado le está obligando á servir en dicho cuerpo contra su voluntad y espreso consentimiento.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de donde proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—

*Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.*

*—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—*

*J. M. del Castillo Velasco.—M. Azaú.*

*—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M.*

*Zavala.—Luis María Aguilar, secretario.*

Son copias que certifico. México, Abril 28 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por Refugio Medina y otros, contra el C. Gefe político de la capital de ese Estado, que los ha juzgado y sentenciado á la pena de muerte como salteadores, con arreglo á la ley de 18 de Mayo de 1871, y no les ha proveído un escrito en que pedían se hiciera saber á los defensores la resolución del juicio para que interpusieran los recursos legales.

## PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito:

El Promotor fiscal, dice: que el diez y nueve del corriente mes, se presentaron Refugio Medina, Abundio Giron, Hilarion Aguilar y Agapito Ramos, exponiendo: que el C. Cruz García Rojas que tiene el encargo de Gefe político del partido, los mandó aprehender y juzgó como salteadores condenándolos á muerte por sentencia pronunciada en el juicio contra el primero y por la en contra de los demas, cuyas fechas no tienen presentes, y no conformándose con tales fallos por no creerse culpables, defectos sustanciales en los juicios y haber concluido el del primero despues de pasados muchos dias del término legal y por falta de competencia de la persona que los ha juzgado; porque aunque colocada en la Jefatura política y encargada de ejecutar la ley, su nombramiento no tiene origen legítimo, por lo que carece de autoridad para fallar legalmente, no teniendo, en tal virtud, valor alguno los fallos pronunciados en su contra; y lo aseguran por tener á la vista el art. 47 de la Constitución del Estado, y art. 104 del reglamento económico político de los partidos, que previene se haga el nombramiento de Gefes políticos directa y popularmente, señalando el modo de sustituir al nombrado en sus faltas é impedimentos; y el C. Cruz García Rojas ha sido llamado sin pertenecer á la asamblea municipal, y sin que por alguna razon legal debiera corresponderle la au-

toridad política, por lo que tal nombramiento es anticonstitucional, porque el poder de juzgar á los saltadores y ejercer actos anexos á la autoridad, no puede venirle mas que de la eleccion popular aun como sustituto, pues el que deba serlo tiene su nombramiento del pueblo, que para ese caso lo elige; por lo que la autoridad del C. Rojas es de hecho y nulas las sentencias y juicios referidos; pues que no solo se ha infringido el artículo citado de la Constitucion del Estado, sino la garantía que otorga el art. 16 de la general, y los arts. 41 y 109 de la misma, que determinan que los Estados adopten el sistema representativo y el pueblo ejercerá su soberanía en los términos que dispone la Constitucion particular del Estado; y por último, se ha faltado á la parte final del art. 82 de la Constitucion general, por no haber hecho saber á su defensor las sentencias como resultado de su peticion, para que con oportunidad empleara los recursos legales. Concluyen con que por tales fundamentos, la Justicia Federal los ampare y proteja contra las sentencias referidas y estar su solicitud en el caso de la frac. 12 del art. 12 de la ley orgánica de amparo y por lo irreparable del mal que les causará la ejecucion de aquellas sentencias y piden con injencia la suspension provisional de los actos reclamados, notificándose á la persona responsable; y antes de concluir, hacen la reflexion de que habiéndoselos tratado como saltadores, se dirá que están suspensas algunas garantías individuales por la ley de 18 de Mayo de 1871, pues no habiendo comprendido la garantía del art. 16 y los demas mencionados, aunque la ley de Mayo establece un procedimiento excepcional, no es tal que se desprece la incompetencia, ó falta absoluta de poder y autoridad, pues sería absurdo que el individuo privado sea el ejecutor de la ley.

Suspensos los actos reclamados en virtud del auto de diez y nueve del presente mes, se mandó remitir al C. Cefe político de esta capital, Cruz García Rojas, copia del ocuro de los quejosos, para que informara sobre lo principal, y evacuado con fecha veintidos, espone: que el dia cuatro del actual fué nombrado Cefe político interino del partido de la capital, segun consta del nombramiento que tuvo á bien expedirle el Gobierno del Estado, del que acompaña copia certificada, en cuya virtud y con arreglo á la ley de 18 de Mayo de 1871, mandó instruir la averiguacion correspondiente en contra de Medina, Giron, Aguilar y Ramos, acusados de robo con asalto, terminando sus procedimientos con la respectiva sentencia de muerte; y conforme con el art. 59 de la dicha ley, remitió las causas al gobierno, que segun informes, los pasó al Supremo Tribunal de Justicia para su revision y que, si los peticionarios dicen haber tenido presentes los arts. 47 de la Constitucion del Estado y 104 del reglamento económico político vigente, se olvidaron de tener á la vista el decreto de la legislatura de 8 de Noviembre de 1871; y como la falta de competencia es el único punto en que fundan los solicitantes el recurso de amparo, creo que suficientemente justificado de la legalidad de sus actos, con el nombramiento que acompaña á su informe, sin que sea cierto que hubiera faltas en la sustanciacion de las averiguaciones, pues asegura que sus procedimientos fueron arreglados á la ley y actualmente están en revision de la superioridad que puede exigirle la responsabilidad.

Por lo espuesto, el Promotor Fiscal, vista la ley de 23 de Mayo del año próximo pasado, que protogó la de 10 de dicho mes de 1871, de suspension de varias garantías, respecto de los plagarios y saltadores; las disposiciones dictadas

por el Ejecutivo en fecha veintitres, en virtud de la autorizacion dada en el art. 49 de la de 1871, y en el decreto de la legislatura del Estado de 8 de Noviembre del mismo año, autorizando al Ejecutivo, para que en caso de faltas temporales de los Gefes políticos y presidentes municipales, se suplan con personas nombradas por dicho poder, es de opinion que en los juicios practicados por el C. Cruz García Rojas, contra los quejosos, acusados de salteadores y de delitos de robo con asalto, no fué incompetente para juzgarlos y determinar legalmente concluida la averiguacion: no cree por tal motivo haya violacion de la Constitucion del Estado y mucho menos de las garantías que invoca del tít. 1º de la general de la República, pues si los arts. 47 de dicho Código del Estado previene que el Gefe político sea nombrado directa y popularmente, y el 27 del reglamento económico político, que en los casos de falta temporal de aquel, suplirá sus ausencias el presidente municipal de la cabecera del partido; mas en el caso presente, la falta del Gefe político propietario fué absoluta por estar pendiente de la responsabilidad que le está exigiendo el Tribunal de Justicia del Estado; y por ella lo sustituyeron los presidentes municipales, que habiendo renunciado, no había ya otra persona que lo sustituyera, siendo por tanto legítimo por el decreto citado, el nombramiento hecho del C. Cruz García Rojas; por otra parte, los quejosos han sido acusados de robo con asalto, y juzgados conforme á la ley de 23 de Mayo de 1872, fueron cumplidos legalmente por el C. Gefe político los procedimientos en la averiguacion del delito, sentenciados dentro del término designado en el art. 3º de la referida ley y remitidos los juicios á la aprobacion del superior, que pudo conceder indulto á los reos, en virtud de corresponderle esta facultad. Pide pues, con los fundamentos alegados, se sirva el Juz-

Tomo III.—Parte II.

gado declarar: que no ha lugar al amparo solicitado por Refugio Medina y socios, en los juicios seguidos en su contra por el C. Gefe político Cruz García Rojas, nombrado interino por el Gobierno del Estado y por consecuencia, legítimamente los ha juzgado y sentenciado como salteadores, que están en el caso del art. 3º de la ley vigente de 23 de Mayo citada, é impone la pena de muerte, salvo el recurso de indulto, con la graduacion de los arts. 629 y relativos del Código penal vigente.

Así lo estima de Justicia y pide en conclusion.

Zacatecas, 25 de Enero de 1873.—  
Firmado.—*Jesus Maria Licona.*

Es copia. Zacatecas, 15 de Febrero de 1873.—*Jesus Maria Licona.*

#### SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Zacatecas, Febrero 14 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por Refugio Medina, Abundio Giron, Hilario Aguilar y Agapito Ramos, contra los actos del C. Gefe político de la capital, quien los ha juzgado y sentenciado á la pena de muerte como salteadores, conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, y no les ha proveído un escrito en que pidieron se les hiciera saber á sus defensores las resoluciones que se dictaran en sus causas, para que aquellos entablaran los recursos legales correspondientes; considerando los quejosos con estos actos violadas las garantías individuales que protejen los arts. 8º y 16 de la Constitucion general, por ser el nombramiento del actual Gefe político contra lo que dispone el art. 47 de la Constitucion del Estado y el 104 del reglamento económico político, infringiéndose ademas los arts. 41 y 109 de la espresada Constitucion general. Visto el auto en que se mandó suspender pro-

visionalmente los actos reclamados, dándole entrada al juicio para aclarar las cuestiones propuestas. Visto el informe justificado de la autoridad en que manifiesta, que como Gefe político interino ha sido nombrado legalmente conforme á las facultades que concedió al Supremo Gobierno del Estado la ley de la legislatura fecha 6 de Noviembre de 1871 y que en todos sus procedimientos se ha ajustado á la ley general de 18 de Mayo del mismo año. Visto el pedimento del C. Promotor fiscal, en el que demostrando no haber violacion de las garantías individuales que se marcan, ni la infraccion de las leyes que se citan, concluye con pedir que no se conceda el amparo á los quejosos. Vistas las pruebas mandadas recibir por el Juzgado, el último alegato de los solicitantes; la citacion para sentencia y todas las demas constancias necesarias de estos autos: Considerando: que la base de este recurso es la competencia del personal de la Jefatura política, por ser su nombramiento contra la Constitucion del Estado y sus leyes secundarias: que por el decreto de 6 de Noviembre de 1871, como Gefe político interino ha sido nombrado el C. Cruz García Rojas con facultades suficientes por el gobierno: que aun en el caso de ser el nombramiento ilegal y contrario á la espresada Constitucion y leyes secundarias, las autoridades federales no están establecidas para la vijilancia y cumplimiento de aquellas leyes, ni para resolver si estas son ó no contrarias á la Constitucion particular, la cambian ó reforman legal ó ilegalmente: que igualmente los juicios de amparo no tienen ese objeto, sino solamente proteger las garantías individuales que señala la Constitucion general: que las autoridades judiciales de la Federacion no deben mezclarse en el régimen interior de los Estados, ni atacar su soberanía, resolviendo si sus autoridades son

ó no legítimas, porque aquellos por sus Constituciones y leyes particulares, tienen autoridades competentes á quienes se han de dirigir sus quejas y reclamos: que conforme á los mismos términos del amparo que se ha pedido, no cabe el recurso, porque este se establece contra los actos de la autoridad y no contra los de los particulares que son los que no ejercen legalmente aquella, sin ser de la competencia de las autoridades federales, como se ha dicho, abrir un juicio para resolver cuales autoridades son legítimas y cuales no: que por lo espuesto aparece, que no hay violacion de la garantía que protege el art. 16 de la Constitucion general en el presente juicio: que en cuanto á la bondad y justicia de los actos reclamados, el Juzgado no puede ni debe resolver: que los quejosos no niegan el carácter de salteadores por el que han sido juzgados conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, reduciéndose á alegar su inocencia, sobre lo que tampoco puede resolver el Juzgado y á desconocer á la persona de la autoridad que los ha sentenciado: que si alguna de las garantías individuales están suspensas para los salteadores y plagiarios, conforme á la ley de 18 de Mayo citada, no se ha demostrado la violacion de las que no lo están: que en la copia de las causas de los quejosos no se encuentra el escrito que dicen no se les ha proveido, ni los interesados señalan su fecha, ni han probado su presentacion, quedando sin demostrar la violacion del art. 89 de la Constitucion general: que la Jefatura política ha cumplido con remitir en revision sus actos y procedimientos conforme á lo que previene la ley de 18 de Mayo, y que el Supremo Gobierno del Estado oficialmente y sin peticion de los reos ha sustanciado el recurso de indulto. Atendiendo á que se abusa del amparo, empleando el recurso como un medio de entor-

pecer la accion de la ley y de la autoridad, destruyendo las medidas extraordinarias adoptadas con sacrificio para afianzar la seguridad pública; de conformidad con lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869 y lo pedido por el C. Promotor fiscal, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado declara:

1º Que la Justicia de la Union no protege ni ampara á Refugio Medina, Hilario Aguilar, Abundio Giron y Agapito Ramos, por no haberse violado en sus personas las garantías que protejen los arts. 8º y 16 de la Constitucion general por los procedimientos del C. Gefe político de la capital, que los ha juzgado conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871 como saltadores, imponiéndoles la pena de muerte.

2º No se impone á los quejosos la multa de la ley por su insolvencia.

3º Se advierte al C. Promotor fiscal, por no haber presentado su alegato como debia haberlo hecho, segun el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia fecha 9 de Octubre del año próximo pasado.

4º Remítanse los autos á dicha Suprema Corte de Justicia, publicándose esta sentencia en el periódico "Oficial del Estado" y sacándose las copias respectivas para el "Semanario Judicial." Hágase saber. El C. juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó. Doy fé. — Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Febrero 15 de 1873.—*Luis G. Chavez*, secretario.

#### EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 29 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por Refugio Medina, Abundio Giron, Hilario

Aguilar y Agapito Ramos, contra los procedimientos del Gefe político de la capital, quien los ha juzgado y sentenciado á la pena de muerte como saltadores, con arreglo á la ley de 18 de Mayo de 1871, y no les ha proveido un escrito en que pedian se hiciera saber á los defensores la resolucion del juicio para que interpusieran los recursos legales, alegando que con estos hechos se violan las garantías que otorgan los arts. 8º y 16 de la Constitucion general de la República, y que con el hecho de conocer una autoridad anticonstitucional, se violaban los arts. 47 y 109 de la misma Constitucion. Vistas las constancias de autos y considerando: que los quejosos motivan su queja en que al actual Gefe político interino no ha sido nombrado con arreglo á las leyes particulares del Estado de Zacatecas, que previenen lo sean popularmente y determina la manera como deben cubrirse las faltas de dichos funcionarios, el aserto de los quejosos no aparece fundado, puesto que el Ejecutivo, apoyado al hacer el nombramiento interino de prefecto político, en la ley de 6 de Noviembre de 1871, expedida por la legislatura de ese Estado, que apareciendo que los procedimientos de esa autoridad se han ajustado á las prescripciones de la ley de 18 de Mayo de 1871, sus actos no importan violacion alguna de las garantías aducidas por los peticionarios en su escrito de queja. Con tales fundamentos, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Zacatecas, cuya parte resolutive es como sigue: "Que la Justicia de la Union no protege ni ampara á Refugio Medina, Abundio Giron, Hilario Aguilar y Agapito Ramos, por no haberse violado en sus personas las garantías que protejen los arts. 8º y 16 de la Constitucion general, por los procedimientos del C. Gefe político de la capital, que los ha juzgado conforme á la

ley de 18 de Mayo de 1871, como salteadores, imponiéndoles la pena de muerte.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Hoz.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Juan A. Matcos,* secretario.

Son copias que certifico. México, Abril 29 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el C. Juan Amador, contra providencias del C. Jefe político del Canton de Zongolica, por violación de garantías.

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor Fiscal dice: que el C. Juan Amador solicita amparo y protección de la Justicia Federal, contra procedimientos de la Jefatura política de Zongolica que le violan garantías individuales.

Con vista de su escrito y copia de documentos que acompañó en que constar que habiéndose presentado como reo político al Supremo Gobierno acogiéndose á la amnistía decretada por dicha Suprema autoridad, fué comprendido en aquella, se dispuso por el Juzgado la suspensión de los actos reclamados, di-

rigiéndose la oportuna comunicación al C. Jefe político para su cumplimiento y para que informara en el término de la ley sobre los hechos que se refieren en el recurso del quejoso.

Examinado ese informe resulta confesado por el Jefe político, que D. Juan Amador no figuró en las filas de los pronunciados por el plan de la Noria, que entraron en Zongolica y atacaron su guarnición incorporándola en el número de las fuerzas vencedoras, y haciendo algunos prisioneros, y que al retirarse dichas fuerzas de Zongolica para un punto llamado "La Quinta" fué cuando Amador se unió á ellas en clase de subalterno, resultando por lo mismo cómplice de los fusilamientos que los mencionados pronunciados hicieron en aquel punto, y por cuyo motivo el asesor nato del Juzgado de Zongolica los ha considerado á todos comprendidos en la ley general sobre salteadores y plagiarios.

Basta esta sencilla relación de lo conducente de los hechos que aparecen justificados en autos, para comprender desde luego que se ha confundido al reo político D. Juan Amador con los delinquentes comunes de salteamiento y plagio que la ley general indicada ha querido castigar con suspensiones de garantías, para limpiar á la sociedad de la inmundicia plaga que la aflige.

Y estando amnistiado como tal reo político sin perjuicio de tercero, á este solo corresponde el derecho de reclamarle ante los tribunales competentes el daño que le hubiese causado durante el tiempo que estuvo sustraído de la obediencia de las autoridades legítimas. Por consiguiente, ese derecho deben ejercitarlo únicamente los parientes de los fusilados en "La Quinta," si es que algun participio tuvo en ese acto D. Juan Amador y en caso negativo la reclamación debe dirigirse exclusivamente contra los que sean culpables.